

Working Group IX

Working document 05

Groupe de travail IX « Simplification »

OBJET : **Simplification des procédures**
 - propositions de M. Gabriel Cisneros

Les membres du groupe trouveront ci-joint la version espagnole des propositions de M. Gabriel Cisneros en ce qui concerne le contrôle des compétences d'exécution et les procédures de comitologie.

SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Propuestas sobre el control de las competencias de ejecución y sobre los procedimientos de comitología

El Documento CONV 271/02 plantea la cuestión de la adopción de normas de ejecución y la necesidad de una reflexión sobre los mecanismos de control de competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, así como la posible revisión del actual sistema de comitología.

1. La aplicación del derecho comunitario y los mecanismos de control de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

En el actual sistema del Tratado la aplicación del derecho comunitario corresponde a los Estados miembros. Así lo estipula con claridad el artículo 10 del Tratado CE al disponer que los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento del Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Dicha aplicación se lleva a cabo bajo el control de la Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados y, en último término, del Tribunal de Justicia.

El artículo 202 del Tratado CE permite que, en determinados supuestos, el Consejo atribuya a la Comisión determinadas competencias de ejecución o se reserve el ejercicio directo de dichas competencias.

El Tratado, por tanto, atribuye estas competencias al Consejo, no tanto por su condición de órgano legislativo, sino como institución en la que están directamente representados los Estados miembros, como responsables de la aplicación del derecho comunitario. Por la misma razón, los Comités que asisten a la Comisión para el ejercicio de estas competencias de la Comisión están compuestos por representantes de los Estados miembros que controlan mediante su presencia en los mismos y, en último término, a través del Consejo como institución en la que están directamente representados, las decisiones de ejecución que la Comisión adopte y de la que se han visto parcialmente privados en beneficio de esta última institución.

Son pues los Estados miembros quienes a través de su participación en los Comités y en el Consejo controlan el ejercicio de dichas competencias y no el órgano legislativo. De ahí que el Tratado no contemple este supuesto dentro de los procedimientos legislativos ni haya atribuido competencias al respecto al Parlamento Europeo.

Carece de sentido plantear, por tanto, una distinción entre competencias legislativas y competencias de ejecución eventualmente encaminada a definir los procedimientos o a atribuir a las instituciones competencias de carácter general en uno u otro caso. No se trata de determinar “quién aprueba las normas de ejecución”, ni de establecer un control del legislador sobre la ejecución del Derecho comunitario. No es función propia del poder legislativo controlar la ejecución de las leyes puesto que esta función compete al Tribunal de Justicia, previa la actuación precontenciosa que el artículo 226 del Tratado atribuye a la Comisión.

2. La reforma de los procedimientos de comitología.

La revisión del sistema de comitología, con el fin de corregir su complejidad y opacidad o de crear nuevos mecanismos de control del legislador, incluido el Parlamento Europeo, sobre la actividad de ejecución de la Comisión, ha sido siempre una cuestión de permanente debate.

Sin embargo, cualquier planteamiento de reforma de los procedimientos de comitología debe precisamente tener en cuenta el debate que tuvo lugar previo a la aprobación de la actual Decisión de comitología que solo data de 1999.

Esa Decisión aun no ha podido aplicarse en toda su extensión al no haberse aprobado todavía la totalidad de los Reglamentos de adaptación al nuevo sistema de los Comités.

Cabe por ello preguntarse si es el momento adecuado para promover una nueva reforma cuando la anterior, fruto de un intenso debate, aún no ha empezado a funcionar en la práctica y se carece por tanto de experiencia para poder evaluar su funcionamiento.

Conviene recordar que la Decisión no solo ha simplificado los procedimientos reduciendo el número de variantes, sino que ha ampliado la participación del Parlamento y la obligación de remitirle información sobre numerosos aspectos de los trabajos de los Comités.

Se debería por tanto considerar también la posibilidad de mantener el actual sistema, dando tiempo para realizar esa evaluación de sus resultados.